

ALEJANDRO VÉLEZ SALAS

Saber contar, y la importancia de ir más allá de las estadísticas

Después de pasar varios años sin tener un número estimado de víctimas relacionadas con la lucha contra "el narco" el Gobierno mexicano ha logrado crear una base de datos general que abarca todos los decesos desde enero de 2006 a enero de 2011 en el cual aparecen registrados cerca de 35.000. Estos datos han servido al Gobierno para demostrar que los operativos militares han sido eficaces y que su estrategia es la indicada. Sin poner en tela de juicio dichos estudios estadísticos, creo que el Gobierno federal comete un error al descuidar a las personas que hay detrás de esos datos.

«¿Qué haces?» me preguntó el otro día un amigo mientras platicábamos vía Messenger. Pude haberle contestado que estaba leyendo los diarios, cotilleando en el Facebook o trabajando en mi tesis, pero preferí decirle la verdad para ver cómo reaccionaba: «Estoy contando muertos» le contesté. Parece el tipo de respuesta que daría Bruce Willis o algún otro tipo rudo en cualquier *thriller* de Hollywood para hacerse el interesante, pero por desgracia no estaba buscando imitar a ningún personaje ni darme aires que no me pertenecen. En verdad estaba registrando muertes ya que me ofrecí como voluntario para el proyecto ciudadano Menos Días Aquí, cuya finalidad es contar, nombrar y recordar a los muertos por violencia en México en un blog para que no se queden reducidos a fríos datos estadísticos ni limitados al amarillismo de los medios de comunicación.

Desde muy pequeños a todos nos enseñaron la importancia de saber contar. Estoy seguro de que todos nos emocionamos cuando en la escuela llegábamos hasta el 10. Quién no recuerda las aventuras del Conde Draco en Barrio Sésamo que contaba todo lo que se le ponía por delante: 1 murciélagos, 3 nubes, 7 manzanas. Conocimientos tan básicos como este nunca dejarán de ser importantes en la vida, ya nos dediquemos a la abogacía, a la física cuántica o a sembrar calabazas. Por eso mismo se debe contar hasta en los conflictos armados: el dinero invertido, el armamento usado, los efectivos

Alejandro Vélez Salas es doctor en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra

militares y sobre todo las víctimas. Pero contar personas que han muerto en el marco de un conflicto armado como Afganistán, de una revuelta como la que se vive en Egipto o simplemente de un estado de violencia como el que sufre México no es lo mismo que contar ovejas para conciliar el sueño, porque como dice Antonio Machado: «Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio».

Uno de los varios talones de Aquiles de la estrategia gubernamental contra la violencia relacionada con "el narco" es: abordar el problema con estadísticas; representar las víctimas solo como números y justificarlas como daños colaterales inevitables

En este tipo de contextos generalmente a uno de los bandos –la Administración de EEUU en el caso de las intervenciones en Afganistán y en Irak– no le interesa demasiado que se sepan las muertes asociadas a su intervención, por eso las cifras suelen estar sesgadas y son difíciles de enderezar. Para Sergio Aguayo, profesor-investigador del Colegio de México, en el caso mexicano hubo inicialmente una desatención hacia las estadísticas de fallecidos que se convirtió en un indicador del menosprecio hacia la vida humana.¹ Para intentar remediar este error, y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, desde el Gobierno federal se ha apostado por configurar una base de datos oficial de las víctimas vinculadas con la delincuencia organizada. Esta tarea ha recaído en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que junto con las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal (SSP) y Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la Procuraduría General de la República (PGR) a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) se dieron a la tarea de compartir información para crear una registro de decesos oficial que nació con el nombre de Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada.

El 12 de enero de este año el nombre de dicho registro ha sido cambiado eufemísticamente por el de "Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delinquecual". A pesar del cambio discursivo –un desesperado intento por medio del cual el Gobierno intenta descartarse como causante de los decesos– creo que debe aplaudirse el hecho de que podamos contar con estadísticas confiables. Y digo esto porque era una vergüenza que, como vuelve a decir Sergio Aguayo, el Gobierno haya declarado la guerra pero no haya contabilizado las consecuencias.² De diciembre de 2006 a diciembre de 2010 las

¹ S. Aguayo, «Contando Cruces», *Reforma*, 26 de enero de 2011.

² *Ibid.*

consecuencias, según dicha base de datos, se contabilizan en 34.612 homicidios «presuntamente relacionados por rivalidad delincuenciales».³

El Gobierno federal ha intentado usar los valiosos datos incluidos en esta base para hacer inferencia estadística y tratar de convencer a la ciudadanía de que su estrategia de combate al narcotráfico es la correcta y además está funcionando. El 1 de mayo de este año, ante la idea generalizada de que los asesinatos –¿ejecuciones?– de capos de la droga durante operativos crean más violencia en las ciudades o regiones donde son realizados, desde la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional se han apresurado a analizar el caso de la muerte de Nacho Coronel. Según el artículo de Alejandro Poiré, vocero de Seguridad y Teresa Martínez, directora de Estudios de la Secretaría Técnica, «puede descartarse *estadísticamente* la relación entre la muerte de Nacho Coronel y el aumento de la violencia en la zona en que operaba, particularmente en Jalisco»⁴.

Los autores llegan a esta conclusión una vez que han analizado la tendencia de los fallecimientos antes y después de la muerte del «Rey del Cristal» y hombre fuerte del Cártel de Pacífico. Sin lugar a dudas, el artículo es un gran aporte para entender algunos de los efectos inmediatos de la estrategia gubernamental pero solamente *caeteris paribus*. Debido a esto no deja de ser un trabajo alejado de la calle, de la cotidianidad de las personas que sufren la violencia y que poco entienden de dispersiones, chis y erres cuadradas. Por eso he decidido destacar el adverbio *estadísticamente* de las conclusiones de dicho artículo, porque me parece que ese es uno de los varios talones de Aquiles de la estrategia gubernamental contra la violencia relacionada con “el narco”: abordar el problema con estadísticas, representar las víctimas solo como números y justificarlas como daños colaterales inevitables.

No estoy poniendo en duda que los homicidios hayan decrecido en los meses posteriores a la muerte del operador del Cártel del Pacífico, pero ese no es un indicador de que la violencia haya amainado y que la gente se sienta más segura. El caso de Cuernavaca es un contraejemplo terrible, ya que después del operativo donde es asesinado el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, la «Ciudad de la Eterna Primavera» se ha convertido en la del «Eterno Miedo». Lo que al Gobierno federal no parece importarle es que detrás de cada celda con un 1, 2 ó 7 en esa kilométrica base de datos se esconde un deterioro social inabarcable. Huérfanos, viudas, adolescentes con estrés postraumático, toxicómanos, familias desestructuradas, adultos mayores que tienen que volver a trabajar y un sin fin de consecuencias que no se arreglan con un operativo militar para arrestar a un capo.

³ «Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuenciales» [en <http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/>. Accesada el 20 de mayo de 2011].

⁴ A. Poiré y T. Martínez, «La caída de los capos no multiplica la violencia. El caso de Nacho Coronel», *Nexos*, 1 de mayo de 2011.

Panorama

Es posible que combatiendo con la fuerza de la espada a esa Gorgona de siete cabezas que es “el narco”, se le pueda cortar una, pero las demás seguirán incólumes a pesar del ataque frontal. En mi opinión eso es lo que pasa con la estrategia gubernamental, ya que ignora que en las otras cabezas del llamado “narco” hay campesinos que han tenido que cambiar sus cultivos a causa de un tratado de libre comercio que de libre solo tiene el apelativo; niños y jóvenes que debido al pésimo nivel de la educación han dejado de confiar en la escuela como opción de porvenir; toxicómanos sin oportunidades de rehabilitación por la escasez de políticas públicas; policías mal pagados que reciben un excedente en su sueldo de manos de la delincuencia organizada; políticos cínicos e hipócritas –de todos los partidos– a los que solo les importa el poder y el dinero y que no tienen esa picazón ética por pactar o convertirse en parte de la delincuencia organizada.

Como el lector puede vislumbrar, la mexicana es una realidad social, económica y política tan compleja que los operativos militares y policiales al estilo Jack Bauer en 24 jamás solucionarán el problema de fondo. Lo más probable es que el clima de violencia se agrave, ya que como demuestra en un polémico artículo Fernando Escalante, profesor del Colegio de México, las tasas más altas de homicidios en 2008 aparecen en los estados donde se dieron operativos conjuntos entre la policía y el ejército en 2007.⁵ Puede que sea el polvo que sale debajo de la alfombra cuando se barre, para citar una imagen usada por el presidente Felipe Calderón, pero más que eso me parece que es la consecuencia lógica de combatir el fuego con el fuego sin proporcionar al mismo tiempo –o antes– el bálsamo recuperador de los programas sociales, de salud y educativos.

Aunque suene a publicidad bancaria, una estrategia exitosa para, ya no digamos erradicar, sino mitigar la violencia vinculada al narcotráfico necesita volver a las personas. El Gobierno Federal cuenta con su propia área de opinión pública, que además de las sempiternas encuestas ahora también recurre a estudios cualitativos para medir la percepción de la ciudadanía en temas importantes de la agenda pública. Me imagino que la seguridad y la mal llamada “guerra contra el narco” deben ser temas trascendentales en las entrevistas o los grupos de enfoque, pero dudo mucho que se tomen en cuenta en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Una mujer muy valiente de Ciudad Juárez, cuyo nombre me guardaré en esta ocasión, me contó que antes de la implementación del programa gubernamental «Todos Somos Juárez», emisarios del Gobierno federal fueron a dialogar con miembros de las organizaciones civiles para saber de primera mano sus demandas y propuestas, solo para desestimarlas y ridiculizarlas cuando se puso en marcha el programa. «Nada más vinieron a dividir a la sociedad civil y no nos hicieron caso, Juárez ha sido su laboratorio y las conse-

⁵ F. Escalante, «Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso», *Nexos*, 3 de enero de 2011.

cuencias las pagamos nosotros» me dice la misma mujer, y confirma la información uno de los cables de la Embajada estadounidense en México filtrado por Wikileaks a *La Jornada* en el cual el ex embajador Carlos Pascual escribe:

«El gobierno mexicano no está seguro sobre cómo integrar el Pilar IV de la Iniciativa Mérida (construcción de comunidades sólidas y resistentes) en el marco de una estrategia anticrimen más amplia [...] no se sienten cómodos interactuando con los organismos no gubernamentales». ⁶

A pesar de que la violencia parece estar localizada –que no controlada– en entidades como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja California, Michoacán y Durango,⁷ el terror a ser secuestrado, asesinado o extorsionado cada vez se enraíza más en otras zonas del país. Hay zonas como Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, estado de México, Morelos y Oaxaca que empiezan a parecerse a esos jitomates aplastados que les empieza a salir moho, pero que todavía cortándole la parte pachucha pueden ser comestibles. Una amiga que tiene familia en Tamaulipas me comentaba de los sinsabores de sus parientes que viven a pocos kilómetros del fatídico San Fernando, que desde agosto del año pasado ha entrado en la perversa lista de lugares donde la tierra aloja muerte en vez de dar vida, como son: La Macarena en Colombia, Crni Vih en Bosnia o la Hilla al sur de Bagdad. «Las fosas comunes no fueron ninguna novedad, todo el mundo –incluido el Gobierno– sabía que existían», le comentan sus familiares a mi amiga, pero lo que sí se está convirtiendo en norma son los retenes militares –o de sicarios– en las carreteras o los campos de entrenamiento de Zetas en las rancherías. Por primera vez desde que era niña, mi amiga no fue a visitar a sus parientes.

Las estadísticas gubernamentales no sirven para dimensionar el miedo en el que viven cada vez más mexicanos. El virus del miedo se ha extendido como una pandemia –esta vez una verdadera, y no como la famosa gripe H1N1– y muchos pueblos y ciudades están viendo cómo sus calles, sus lugares de ocio y sus alrededores se han convertido en el escenario de las más cruentas realidades. El caso de las ciudades de la Costa Chica de Tamaulipas es uno en el que los números se quedan cortos. Un informe reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) afirma que durante 2011 el llamado Operativo Noroeste ha logrado el aseguramiento de 51 toneladas y media de marihuana, 238,69 kilogramos de cocaína, 38,8 kilos de heroína, 1.580 pastillas psicotrópicas y casi dos kilos de droga sintética conocida como crystal. El mismo informe destaca el aseguramiento de 2.076 armas largas y 517 armas cortas, casi medio millón de cartuchos para arma de fuego, 451 granadas,

⁶ B. Petrich, «Quiero encarcelar a un juez, decía Osuna Millán para impresionar a EU», *La Jornada*, 19 de mayo de 2001.

⁷ Entidades con más del 65% de los decesos en la República mexicana de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 según Alejandro Poiré, «Los homicidios y la violencia del crimen organizado», *Nexos*, 1 de febrero de 2011.

Panorama

21 lanzagranadas y dos lanzacohetes.⁸ Cuando esta información sale en la televisión o es citada en los diarios internacionales pareciera como si el Operativo Noroeste fuera todo un éxito, pero para saber la verdad habría que hablar con los pobladores de la Costa Chica, si es que todavía queda alguno, pues la mayoría han huido de sus casas hacia donde tengan algún familiar. Según estimaciones de la Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno de Noruega más de 230.000 personas pueden ser considerados refugiados internos a causa de la violencia vinculada con el narcotráfico.

El inicio de la crónica de Diego Osorno puede darnos una idea de por qué los habitantes de Ciudad Mier han preferido convertirse en refugiados:

«La mañana del 22 de febrero de 2010, cuando Ciudad Mier se preparaba para las fiestas anuales, quince camionetas con las siglas del cártel del Golfo (CDG) entraron por el acceso de la carretera de Reynosa como caballos desbocados. Los pistoleros enfilaron a la comandancia de la Policía Municipal [...] seis policías municipales asustados, golpeados, jadeando con la boca abierta, rojos de sangre y con el miedo en la mirada, fueron sacados de la comandancia por los pistoleros, quienes gritaban consignas contra los Zetas. Esa fue la última vez que se vio a los seis policías y fue también la última vez que hubo policías municipales en Ciudad Mier».

Para el periodista salvadoreño Oscar Martínez, que ha recorrido con migrantes centroamericanos la peligrosa ruta desde la frontera sur hasta la frontera con EEUU, «a un pueblo se le domina teniendo de tu parte a medio pueblo y poniendo a temblar a la otra mitad»⁹. La parte del miedo la ponen los cárteles y sus sicarios, pero la complacencia y colaboración es producto de la corrupción que ha anidado en tantos pueblos desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que ahora los soldados están llegando tarde a intentar resolver militarmente un problema que lleva décadas gestándose de manera social, económica y política.

Precisamente debido a lo anterior, y para que el resto de las ciudades del país eviten el fatídico destino de Ciudad Juárez o Ciudad Mier creo que el Gobierno federal primero tiene que aceptar con humildad que la estrategia militar frontal contra los cárteles ha fallado, a pesar de lo que se pueda inferir estadísticamente. El Gobierno ha querido borrar el apelativo de “guerra contra el narco” de los medios nacionales pero no ha hecho nada por atender a las víctimas de su estrategia: huérfanos, mujeres, periodistas, toxicómanos, migrantes, campesinos, pequeños comerciantes, etc. Si en verdad el presidente Calderón –a pesar de

⁸ SEDENA, «Comunicado de prensa», 27 de abril de 2011, Monterrey, Nuevo León.

⁹ Ó. Martínez, «En el camino: Óscar Martínez recorre el camino de los migrantes a través de México» [<http://nuestraaparenterendición.com>]. Acceso el 16 de mayo de 2011].

los tiempos electorales que se vienen— quiere tener una incidencia positiva a largo plazo en la violencia relacionada con el narco, creo que debe poner especial atención en tres colectivos que han sido muy aquejados: los niños y niñas, los periodistas y los migrantes.

Aunque no lo parezca ahora, la tarea más urgente del Gobierno no debería ser capturar o matar sicarios sino evitar que los niños de hoy no engrosen las filas del narco cuando se conviertan en adolescentes. Esto es tremendamente complicado cuando se tiene a miles de niños que han perdido padres, familiares o amigos en condiciones de crueldad extrema y a otros miles que han sufrido allanamientos en sus casas, extorsiones en los comercios de sus padres, balaceras en su vecindario o abusos en retenes militares. Si además estos niños ya no creen que la educación sea una opción de futuro, tendremos en un futuro a una generación llena de resentimiento, económicamente y socialmente marginada, que será el futuro semillero de sicarios, campesinos, pilotos y narcomenudistas.

El Gobierno ha querido borrar el apelativo de “guerra contra el narco” de los medios nacionales pero no ha hecho nada por atender a las víctimas de su estrategia: huérfanos, mujeres, periodistas, toxicómanos, migrantes, campesinos, pequeños comerciantes

Dice Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública que:

«Le indignan los malos, pero más los buenos que no hacen nada para promover y transmitir los valores y conductas para formar una ciudadanía del Siglo XXI y enfrentar a quienes optan por sumarse a actividades ilegales».¹⁰

La *cruzada* del secretario de Educación Pública por los valores cívicos y éticos no llegará muy lejos mientras se siga dedicando solo el 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) a la educación, como sucede en 2011, y gran parte de ese presupuesto lo absorba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como si fuera una rémora. Tampoco tendrá muy buen futuro mientras el Congreso siga aumentando el presupuesto en seguridad como este año, donde se aprobó el equivalente a 1.115 millones de dólares para la Estrategia Nacional de Seguridad. Gracias a este aumento el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aumentará en un 28%, el de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un 13% y el de la Secretaría de Marina (SM) un 10,6%. La imagen terrible de esta realidad es la de la exposición «La gran fuerza de México», donde niños y niñas de primaria jugaron a ser soldados auxiliados por elementos de la SEDENA, que los maquillaron con camuflaje, les prestaron sus chalecos antibalas, les permitieron empuñar ametra-

¹⁰ «Dice Lujambio que México tiene débil estructura de valores», *Diario Provincia*. 4 de abril de 2011.

Panorama

lladoras y finalmente les dejaron practicar en el estándar de tiro. La absurda idea de César Duarte, gobernador de Chihuahua, de ingresar a los “ni nis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) al ejército es el colofón de este escenario verde olivo.

«Prensa, bájenle a tanta mamada, antes que la guerra sea con ustedes»¹¹ dice una pancarta firmada por el grupo narcotraficante Z200, encontrada en Ciudad de Guatemala, pero bien podría haber sido encontrada en Monterrey, en Oaxaca o en Tijuana, porque en México la advertencia de los cárteles se cumple. Después del asesinato del redactor Armando Rodríguez Carreón en 2008 y del fotógrafo Luis Carlos Santiago, el *Diario de Juárez* publicó un polémico pero justificable editorial donde, ante la ausencia del Estado como protector de los derechos de los ciudadanos, se apela a los grupos del narcotráfico –los factores reales de poder en la región– para que expliquen qué es lo quieren de los responsables del periódico para dejar de pagar con las vidas de sus periodistas.

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de marzo de 2005 a marzo de 2011 han ocurrido al menos 68 homicidios y 13 desapariciones de periodistas en México,¹² colocándolo como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el oficio periodístico. A Araly Castañón, también periodista del *Diario de Juárez*, le causa gracia y tristeza que los periodistas de *Al Jazeera* cubran los acontecimientos de su ciudad con cascos y chalecos antibalas y que periodistas estadounidenses le comenten que se sienten más seguros en Bagdad porque por lo menos ahí saben qué esperar. Lo peor del caso es que no solo se cometen asesinatos, sino que también hay cientos de extorsiones, intentos de censura –acaban de tirar una granada frente a la redacción *La Vanguardia* en Chihuahua– y que ni el Gobierno federal ni los gobiernos locales hagan mucho por resolverlos. Debido a esto el *Committee to Protect Journalists* (CPJ) coloca a México en el sexto lugar con un índice de impunidad por la no resolución de asesinatos a periodistas por encima de países asolados por la guerra como Ruanda, Somalia y Camboya.¹³

Hacia finales de 2010 la Secretaría de Gobernación estableció el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas inspirado en el modelo colombiano, pero la extrema burocratización del órgano y la vaguedad de sus lineamientos han despertado críticas entre los periodistas y comunicadores. Para Omar Rábago, del Colectivo Artículo XIX, hace falta profundizar y ponerse de acuerdo en el concepto de protección, establecer acciones concretas en la aplicación de la iniciativa –se barajan opciones de seguros de vida, escoltas, boletos de avión, protección de patrimonio–, establecer pautas y evaluaciones constantes sobre el riesgo de los trabajadores de la información, y

¹¹ Jorge Alejandro Medellín, «Zetas en Guatemala: expandiendo territorios», *Milenio Semanal*. 29 de mayo de 2011.

¹² «Reporta CNDH 68 homicidios de periodistas en México desde 2005», *Milenio*. 3 de mayo de 2011.

¹³ Reporte sobre México del *Committee to Protect Journalists* [en <http://cpj.org/killed/americas/mexico/murder.php>, accesado el 24 de mayo de 2011].

sobre todo no considerar al crimen organizado como el único perpetrador, ya que el 40% de las agresiones a periodistas corre a cargo de fuerzas gubernamentales.¹⁴

Finalmente, la que se ha convertido en la carta de presentación de México desde agosto del año pasado son las vejaciones varias que sufren los migrantes que cruzan por el territorio nacional para llegar a la frontera norte, de las cuales la masacre en San Fernando de Tamaulipas no es más que la punta de un iceberg inmenso. El trayecto hacia el sueño americano nunca ha sido fácil, pero a día de hoy ser migrante en México es más peligroso que ser un *hobbit* en la imaginación de Tolkien cargando el anillo a las puertas de Mordor. Además de una geografía escabrosa, transporte escaso y bandas de secuestradores de poca monta, ahora las mujeres, hombres y adolescentes que dejan sus países para ir en pos de un futuro mejor se tienen que enfrentar con los poderosos cárteles de la droga que han decidido diversificar su negocio e incursionar en el del secuestro y la extorsión. Pero de nuevo, al igual que en el caso de las amenazas a periodistas, miembros de instituciones del gobierno también participan en la bonanza que brinda este nuevo nicho de mercado. Me refiero sobre todo a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y a elementos de la policía municipal. Escuchemos a Ana, nombre ficticio de una de las informantes del Padre Alejandro Solalinde en el Albergue de Ixtepec en Oaxaca, ciudad donde para la llamada Bestia, tren de carga que usan los migrantes para transportarse:

«¿Qué es la mafia de Ixtepec de la que tanto habla el padre, Ana? —le preguntamos.
—Todos son la mafia, los municipales, los judiciales, los taxistas, los empleados de los buses, los de los hotelitos, todos.
—¿Y qué hacen?
—Son secuestradores. Se llevan a los migrantes y les quitan todo o piden dinero a sus familias en Estados Unidos. A las muchachas las violan, a los muchachos los golpean y hasta ha habido muertos».

Según datos de la CNDH, 11.333 migrantes fueron secuestrados durante 2010 y generaron ganancias de más de 25 millones de dólares para sus captores. Seguramente los números son mucho mayores, ya que si a un visitador de la CNDH le comenta un migrante que entre 40 y 60 personas fueron secuestradas, el visitador debe tomar el número más bajo para las estadísticas. En segundo lugar, la mayoría de los migrantes tiene miedo de denunciar lo sucedido, pues ser migrante en México —como en los EEUU y en Europa— equivale a ser criminal y puede ser penado con cárcel de dos años si es la primera vez u ocho si se es reincidente.

Los migrantes —y más si son mujeres e indígenas— son la carne de cañón de la lucha contra el narcotráfico, son el escalafón más bajo de los daños colaterales, son auténticos *homini*

¹⁴ Omar Rábago, «Incompleta la iniciativa de medios», *Radio Bemba*. Programa del 25 de marzo de 2011.

Panorama

sacer, son personas proscritas que pueden morir o ser matadas por cualquiera con impunidad, y cuya muerte no es éticamente condenable. Solo abarcan las portadas cuando mueren en grandes números y con violencia inusitada como en San Fernando o cuando se hace un documental o una exposición sobre su azaroso camino. El Senado acaba de aprobar una reforma a la Ley de Inmigración que garantiza la igualdad de tratamiento a los inmigrantes en el ejercicio de todos sus derechos –educación, salud, asistencia jurídica, información y reconocimiento de su personería jurídica– independientemente de su situación migratoria y además deroga las penas de cárcel de las que hablé anteriormente, pues crea tres tipos de estatus migratorio: visitante, residente temporario y residente permanente. Sin embargo, la ley también ha sido muy criticada porque le da a SSP atribuciones para realizar operativos y redadas fuera de las zonas comunes de tránsito y también prevé penas para los que asilan o ayudan con fines de lucro a los migrantes irregulares. Asimismo le da al terriblemente cuestionado INM la atribución total de la política migratoria, que hasta ahora era llevada por la Secretaría de Gobernación.

Con el Derecho Penal del Enemigo rondando las leyes de inmigración en todo el mundo, desde Arizona hasta Italia, entiendo que es muy complicado en términos de *realpolitik* legislar una reforma migratoria que –aunque sea sobre el papel– facilite a los migrantes su trayecto a EEUU. Ignoro cómo quedará dicha ley después de pasar por las manos de senadores y diputados, pero si al final es aprobada y solo sirve de ornato por no tomar en cuenta los factores reales de poder, el Gobierno debería hacer lo posible para por lo menos quitarle a los migrantes un obstáculo en su camino depurando los cuerpos del INM y las policías municipales que ya acumulan en su haber varias denuncias de corrupción y hasta de trata de personas.

Antes de terminar de escribir este artículo he podido ver la nueva campaña del Gobierno federal para acabar con lo que según ellos son los mitos en la lucha por la seguridad. Con un video de estética de historieta¹⁵ se pretende convencer a la ciudadanía que es falso que en la lucha del Gobierno federal por la seguridad no haya estrategia y que se emplee solamente la fuerza. Se afirma en el video que el Gobierno planeó y diseñó una estrategia integral para reconstruir el tejido social, lograr la transformación institucional del Estado, mejorar la corresponsabilidad de la comunidad internacional y limitar el crecimiento de los grupos criminales e índices delictivos. Salen sonrientes funcionarios de inteligencia argumentando las necesidades de escalar las capacidades operativas y tecnológicas del Estado, y también elementos de la policía federal con sus pasamontañas y armas largas argumentando que la ciudadanía no puede estar a merced de estos criminales. Pero en ningún momento se ven maestros bien remunerados, periodistas cumpliendo con su trabajo con total seguridad, activistas ayudando a migrantes, médicos o psicólogos atendiendo casos de estrés postraumático, o mejor aún funcionarios corruptos entre las rejas. Quizás porque eso también es un mito que el Gobierno federal no quiere reconocer.

¹⁵ Véase video de la Secretaría Técnica en [http://www.youtube.com/watch?v=QIAVeh8THVM&feature=player_embedded]. Acceso el 30 de mayo de 2011].